

Viaje a
Inglaterra

COMO se recordará, los Reyes de España no asistieron a la boda del príncipe de Gales, hace algún tiempo, porque el heredero proyectaba viajar a Gibraltar en viaje de novios. El gesto regio fue agradecido por la opinión pública española, por cuanto manifestaba inequívocamente una postura ante la secular reivindicación española sobre el Peñón de Gibraltar, cedido a Gran Bretaña en 1713 por el Tratado de Utrecht, absurdamente despreciado por Felipe V —se negó a ingresar en la cuádruple alianza— y por Fernando VI —no aceptó una oferta británica de entregarlo a cambio de apoyo español para reconquistar Menorca, en manos francesas—, y perdido definitivamente por Carlos III, quien, tras fracasar en varios intentos militares de reconquistarlo, firmó en 1763 la paz de Versalles, que ponía fin a las hostilidades hispano británicas. Hasta 1950, Gibraltar fue exactamente una «colonia» de la Corona, en la que el gobernador designado ostentaba todo el poder legislativo.

La vieja reivindicación española, aunque estancada, tiene a su favor la llamada «declaración de Lisboa» arrancada por Marcelino Oreja en su etapa de ministro de Asuntos Exteriores. En este documento se hace referencia desde Utrecht a la negociación de la cuestión de soberanía sobre la plaza. Y aunque lo cierto es que poco se ha progresado en esta dirección, no debe olvidarse que España apenas hace algo más de tres meses que pertenece plenamente a Europa marco este en el que habrá que arreglar el contencioso.

En este contexto, la visita del jefe de Estado español tiene un significado político bien concreto: una vez que España se ha integrado en la misma comunidad internacional a la que pertenece Gran Bretaña, la CEE, y que ha pasado a formar parte de modo definitivo de la alianza militar en la que forman la inmensa mayoría de las naciones libres de Europa Occidental, ha llegado el momento de normalizar primero las relaciones con Gran Bretaña, para pasar después a cooperar en el marco multilateral de la Comunidad, tanto económica como políticamente, y para negociar, con la afabilidad que caracteriza el discurso de dos amigos y aliados, el único contencioso pendiente, largo y arduo pero en modo alguno irresoluble.

El mundo anglosajón está históricamente lejos de España. Razones básicamente religiosas han creado enfrentamientos, no sólo en el terreno político sino en el ideológico. Los anglosajones, que aceptaron la reforma protestante, eludieron así una oscura etapa de represión moral contrarreformista, y crecieron en democracia hasta hoy en un clima de franca tolerancia, de libertad sin límites. España, en cambio, mantiene todavía hoy una oscura coraza de intangibilidad en el subconsciente colectivo.

Pese a todo ello, la relación debe establecerse. Gran Bretaña y España mantienen dos rancias monarquías de singular arraigo y tradición, que pueden servir para facilitar los nexos y los vínculos. Y al estar ambos países embarcados en la misma aventura colectiva, tienen ahora la oportunidad de conocerse y de entenderse, algo que no sucede desde que los británicos —a pesar del Peñón— nos ayudaron a librarnos de los franceses en nuestra épica guerra de la Independencia.

Se trata, pues, de uno de los viajes regio más importantes de cuantos han hecho los monarcas hasta ahora. Porque España no acabará de estar en Europa hasta que no se vincule sinceramente, incluso por vía de la cultura, con Francia y con Gran Bretaña. Con Francia, lo vamos consiguiendo con esfuerzo. Con Gran Bretaña, hemos de comenzar el empeño.

Pedro VILLALAR

Elecciones anticipadas

CUANDO restaban pocas fechas hábiles para que un oportuno decreto de disolución permitiera celebrar las elecciones generales el mismo día que las andaluzas, habida cuenta los plazos reglamentarios que marca la Constitución, el presidente del Gobierno, haciendo uso de sus prerrogativas y tras meditar un largo fin de semana, optó ayer por la disolución de las cámaras. Así se desmentía a sí mismo, puesto que reiteradamente había expresado su voluntad de agotar el mandato; bien es cierto que, políticamente, el mandato estaba exhausto, a falta tan sólo de algunas cuestiones muy concretas, la televisión privada entre ellas.

González eludió también la sombra de la moción de censura que, al parecer, tenía Fraga guardada en la recámara. A la hora de escribir estas líneas no se conoce la reacción de la oposición todavía, pero no ha habido sorpresa: desde días atrás, el rumor de la anticipación estaba en la calle, y existían datos seguros acerca de la reserva en firme de valvas publicitarias por el Partido Socialista.

Las razones que haya podido tener el presidente del Gobierno deben ser complejas, pero sin duda ha tenido en cuenta, sobre todo, las expectativas que, en términos de rentabilidad política, le ofrecía cada uno de

los términos de la disyuntiva que tenía ante sí.

En primer lugar, el mandato está, como se ha dicho, políticamente cumplido. De aquí a noviembre —fecha en que, de no ser ahora, se hubieran celebrado previsiblemente los comicios— el Gobierno y el partido que lo sostiene hubiera asistido a una ceremonia de desgaste «por goteo» por parte de la oposición, que tampoco hubiera podido ser contrarrestada con alguna acción espectacular, impensable al borde de unas elecciones.

En segundo lugar, el presidente del Gobierno debe haber ponderado la situación presente y futura de la competencia electoral. La derecha, la Coalición Popular, sufre un lento declive bien visible. Pero como la derecha tiene no sólo un techo máximo sino también un techo mínimo, no parece verosímil que su potencial objetivo varíe en unos meses. La izquierda sí sale claramente perjudicada de la anticipación: los frutos de aquella «Plataforma Cívica» que arrancó casi siete millones de votos en el referéndum anti-OTAN no se han cosechado todavía, ni hay tiempo de materializar en unos días una opción unitaria con credibilidad y arraigo. En cualquier caso, el escaso eco de las convocatorias de la Plataforma con ocasión del conflicto libio-americano

no debe hacer recapacitar a sus promotores, porque está ya claro que lo que arrastró electores fue la «cuestión OTAN» y no la Plataforma en sí misma.

El Partido Reformista, por su parte, en posesión del centro político tras el naufragio de Suárez, tendrá que demostrar su entidad en estas elecciones, y si bien quizá hubiera tenido más oportunidades con un tiempo añadido para prepararse, no parece que la anticipación le produzca un gran perjuicio.

Por último, justo es reconocer que una decisión presidencial hay un punto apreciable de racionalidad política. Acabamos, como quien dice, de celebrar las elecciones generales, y si no se hubiera remediado a tiempo este país hubiera sufrido otra de esas elecciones importantes en lo que queda de año. Bien está agrupar en lo posible las consultas para no marear en exceso al ciudadano, para ahorrar dineros públicos y privados, y para que la política no nos vuelva locos a todos.

Nos esperan dos meses de riesgo de tensión, de esfuerzo político, de ríos de comentarios, de saturación ideológica... No brá que ponerse manos a la obra.

Antonio PAPELL

Euskararen Eguna

El euskara es de todos y para todos (y II)

EL lema del día del euskara que comenté anteriormente, tiene otros aspectos importantes a partir de la afirmación de que el euskara es la lengua nacional del Euzkalerria y el lazo fundamental de su unidad.

Política nacional del euskara

Lo de política nacional del euskara no tiene una interpretación necesariamente nacionalista. Los que han aceptado la Constitución española, aún no siendo nacionalistas vascos, pueden consecuentemente a partir de ella aceptar unas bases y un marco de política nacional del euskara, desde el momento en que se reconocen las nacionalidades y la posibilidad de unos acuerdos «superestatales» en las comunidades lingüísticas que sobrepasen los límites del Estado. Bastaría el reconocimiento de la realidad de una Euzkalerria con su propia lengua: el euskara y la voluntad política de preservar y promover su identidad. Todo eso no es todavía política nacionalista.

Lo que aquí quiero resaltar yo, es que el euskara no es monopolio de un partido político, ni siquiera es monopolio de los abertzales. Se puede serteóricamente euskaltzale sin ser abertzale —aunque a mí parecer no lo contrario— al igual que se puede ser partidario y defensor de la lengua catalana, sin ser necesariamente nacionalista. Por qué, me pregunto yo PSE y el AP de Euzkalerria no deben defender una política nacional del euskara? A mí me parece que a veces su rechazo al euskara es la contrapartida de la consideración y del uso monopolista y partidista del mismo por parte de los partidos nacionalistas. Es triste —y hasta dramático— que dos partidos importantes de Euzkalerria Sur no tengan apenas una o dos personas que puedan expresarse en público en euskara. Triste para ellos, dramático para todos. Aunque por otra parte creo que el aprendizaje del euskara es una de las vías más directas para que la gente se acerque e incluso se identifique con el abertzalismo. Pero eso es un problema que los partidos estatistas deben afrontar desde su perspectiva y no rehuirlo si realmente quieren afrontar el problema político del euskara y de su normalización.

Evidentemente la aceptación de una política nacional del euskara tiene sus bases y sus condiciones que es preciso no soslayar.

Oficialidad y prioridad

Para una política nacional del euskara es necesario el estatuto jurídico de su oficialidad en toda Euzkalerria, al menos en forma de cooficialidad con el francés en el Norte y con el castellano en el Sur. El no reconocimiento de esa oficialidad en todo el territorio del País Vasco, además de oponerse al derecho de todo vasco a su lengua, discrimina a los que quieren hacer uso de ella en cualquier parte de Euzkalerria.

Pero es que cualquier principio jurídico o ético topa con la realidad social, a la que aquí se debe aplicar. La afirmación de la oficialidad del euskara en toda Euzkalerria debe ser un principio y punto de partida, pero sobre todo debe ser un objetivo operativo y político, si no se quiere quedar en la simple afirmación de un principio teórico.

Efectivamente, la realidad sociolingüística del Pueblo Vasco, a la que se ha llegado tras largos siglos de una política de sustitución del euskara por el erdara (castellano o francés) exige una prioridad política y de acción en favor de la promoción y de la normalización del euskara, si no quiere condenar a letra muerta el principio de la oficialidad.

Planificación general y política unitaria

Aquí entramos en el slogan del día del euskara del año pasado, que se centró en la reclamación de la planificación general para la normalización del euskara. Naturalmente la reclamación va a estar presente también este año, porque la necesidad sigue permaneciendo.

La planificación política significa ante todo que la Administración pública debe intervenir en la normalización del euskara. Es impensable que nuestra lengua nacional pueda ni siquiera sobrevivir sin una política clara y

decidida de apoyo, de promoción y de extensión con vistas a una recuperación individual y colectiva de la misma. En la situación actual de diglosia y de inanición —incluso de agotamiento del euskara el «liberalismo lingüístico» del «laissez faire» no pasa de ser un chiste desesperante.

La política de planificación general para la normalización del euskara no puede menos de ser unitaria: es decir, que abarque a todo el País Vasco. Naturalmente el ser unitario no significa que sea indiferenciada. La situación socio-lingüística de las diversas zonas deberá de ser tenida muy en cuenta por una política realista —los socio-lingüistas han dicho y tienen mucho que decir sobre eso—, pero sin quitar de vista nunca el principio y el objetivo de una política nacional del euskara.

En la situación administrativa actual del País Vasco, dividido en tres administraciones: Norte, Nafarroa y Vascongadas, la política nacional y unitaria exige y comporta amplios acuerdos de política sociolingüística entre las tres administraciones. A este respecto se puede responder al lema de «El euskara: de todos y para todos». A este respecto es realmente lamentable e irremediable el que ni siquiera se haya llegado todavía a un acuerdo para la recepción de la Ley de Nafarroa e incluso en Euzkadi Norte. Se sabe que entre otros, no faltan motivos partidistas y oportunistas, que han impedido tal acuerdo: incluso de algún grupo político autodenominado nacionalista.

Consenso entre los partidos

No es la primera vez que insisto en este tema. Pero nunca será inútil, sobre todo después de haber visto y sufrido las manipulaciones políticas y las apelaciones partidistas y oportunistas del euskara, como las que se dieron en torno al referéndum sobre el OTAN. Por fortuna parece que en esas condiciones al menos la mala conciencia administrativa, por parte de las diversas administraciones públicas.

Pero por otra parte parece que van aumentando las voces que piden y exigen un acuerdo sobre mínimos entre los partidos políticos y otras fuerzas sociales y culturales para superar la situación de incapacidad social de Euzkalerria y de incapacidad general para la normalización de nuestra lengua nacional, por parte de las diversas administraciones públicas.

En todo caso el eventual acuerdo político social para la normalización del euskara no puede mirar a contentar a los enemigos del principio de nuestra lengua nacional y cultura a las fuerzas políticas, sociales y culturales que más se mueven por su defensa y promoción y normalización. Sería absurdo y patético. Sería la muerte del euskara.

P. KORTABARRIA

